

EXCLUSIÓN SOCIAL Y VIOLENCIA URBANA EN AMÉRICA LATINA¹

DIRK KRUIJT

EXCLUSIÓN SOCIAL

A COMIENZOS DEL SIGLO XXI, LA POBREZA TRANSGENERACIONAL, la informalización de la economía y la exclusión social de vastos segmentos de la población son problemas estructurales que afectan a la América Latina democrática. Ciertamente, estos problemas no son nuevos. Ya habían sido identificados en términos de miseria rural y marginalidad urbana. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la pobreza extrema y la exclusión social en América Latina tenían un rostro predominantemente rural: se trataba sobre todo de la población indígena con carencias económicas, sociales y políticas que se traducían en una ciudadanía de segunda clase (Bastos, 1998: 100-101). En algunos países la exclusión social de los indígenas adquirió un estatus casi permanente. Por esta razón Solares (1992: 50) tipificaba a Guatemala como “un estado sin ser una nación”. Y Flores Galindo (1994: 213) caracterizaba a Perú, por la segregación entre mestizos e indios, como “una república sin ciudadanos”.

Sin embargo, la informalidad urbana se ha hecho sentir con toda su fuerza como resultado de la crisis económica y de los años de reajuste estructural que han experimentado casi todos los países del continente. La presencia de enormes contingentes de pobres, principalmente en las grandes aglomeraciones urbanas, comenzó gradualmente a ser identificada como problema de suma importancia. El “desborde popular” (Matos Mar, 1984) de los migrantes rurales cambió definitivamente la fisonomía de las metrópolis y aglomeraciones urbanas en la forma de favelas, villas, barriadas, comunas de miseria o “barrios populares”. En una publicación sobre la dinámica de la pobreza urbana, la informalidad y la exclusión social en América Latina (Kruijt, Sojo y Grynspan, 2002), introdujimos la noción de

¹ Artículo basado de una ponencia presentada en el seminario “Crime, Justice and Violence”, el 28 de mayo de 2004, en el Institute of Latin American Studies, University of London.

una nueva clase transgeneracional de habitantes urbanos pobres a partir de los años ochenta en adelante. Entre 1950 y 1980, la economía informal (medida en términos de autoempleo) en el continente creció de 15 hasta 20% de la población económicamente activa (PEA), para acelerarse considerablemente más en las dos décadas posteriores a 1980 (Galli y Kucera, 2003: 24-26). Desde Monterrey en el norte de México hasta Puerto Montt en el sur de Chile, los informales y los autoempleados invadieron el espacio público de las calles. Invadieron, literalmente, los anillos de miseria que rodean los cascos urbanos. A comienzos del siglo XXI, América Latina es el continente donde segmentos significativos de la población, que en algunos casos constituyen la mayoría de la población nacional, son a la vez pobres, informales y excluidos. La economía informal está compuesta sobre todo por autoempleados cuya actividad económica es de sobrevivencia diaria (Alba Vega y Kruijt, 1995). Los microempresarios forman, dentro de la informalidad, una relativa élite. Portes y Hoffman (2003: 51) enfatizan el hecho de que hay una zona gris entre la informalidad y la economía formal. Sin embargo, también destacan el proceso de marginalización estructural de la informalidad. La informalidad tiene además un rostro étnico; la etnicidad es un factor de estratificación. Entre los mecanismos de sobrevivencia predominan lazos étnicos y religiosos, relaciones de familia (reales o simbólicas) y cercanía en términos de lugar de nacimiento o de pertenencia a los barrios populares. La economía y la sociedad informales se hallan excluidas del empleo estable, del ingreso regular, de los sindicatos, de la legislación laboral y del acceso a las instituciones sociales que proveen servicios básicos tales como los de vivienda.

El panorama de las transformaciones económicas y sociales en América Latina puede ser analizado en detalle en el caso de Perú. Entre 1960 y 1995 se redujo el porcentaje nacional de campesinos indígenas de 50 hasta 25 (Cotler, 1995). Lima, ciudad elegante con medio millón de habitantes a finales de la década de los cuarenta, es ahora una metrópolis deprimida con más de ocho millones. La estructura de clases en Perú ha sido afectada por estos cambios demográficos y urbanos. Con la reforma agraria de los gobiernos militares, entre 1968 y 1980, se expropiaron las posesiones de la clase latifundista. Esta reforma significó también el comienzo de un proceso de migración masiva y sostenida del campo a la ciudad. Igualmente, la estructura del trabajo urbano se modificó en forma drástica. Hasta el inicio de los años ochenta, 65% de la PEA urbana recibió un sueldo o salario formal. El cuadro 1 muestra una reducción dramática de este porcentaje, acompañada por un fuerte incremento de la economía informal. Sintetizando varias fuentes (López, 1996; Kruijt, 1997: 205-207; Mintrabajo, 2002), puede concluirse así:

CUADRO 1
Población económicamente activa (PEA) en Perú (1995)

%			%	
29	recibe sueldo o salario	sector privado	1 560 000	18
		sector público	790 000	9
		sector cooperativo	200 000	2
61	no recibe sueldo o salario	independientes urbanos	2 516 000	30
		campesinos	1 200 000	14
		trab. familiares	700 000	8
		trab. informales	550 000	6
		trab. domésticas	260 000	3
10		desempleados	864 000	10
100		total PEA	8 640 000	100

Fuente: Kruijt, Sójo y Grynspan (2002: 21), con base en datos de la OIT.

—Al comienzo de los años ochenta, 65% de la PEA recibía un salario o sueldo regular. A partir de los años noventa se nota una reducción considerable de esta categoría de la PEA. Ello puede interpretarse como un indicador del crecimiento de la economía informal en el país.

—Durante la década de Fujimori (1990-2000) el país experimentó una enorme reducción de su estructura sindical. En el año 2000, solamente 7% de los trabajadores del sector privado era sindicalizado y únicamente 2% contaba con un convenio colectivo (Mintrabajo, 2002).

—Comparando los datos censales de 1972, 1981 y 1993 puede observarse el crecimiento del empleo femenino: de 34% hasta 50% en 1993. Este fenómeno puede ser interpretado como un indicador general de la feminización de la pobreza, dado que la economía informal genera el mayor empleo.

—Entre 1980 y 1995, de cada cinco nuevos puestos de trabajo, cuatro habían sido generados en el sector informal. En el decenio del gobierno de Fujimori se consolidó la informalidad peruana.

—Puede concluirse que el empleo informal generado en el mercado de trabajo fue consolidado durante la década de los noventa.

CUADRO 2
Estimación de la pobreza en Perú (1985-2000)

Año	Población total (x 1.000)	Total de pobres (x 1.000)	Porcentaje de pobres en Perú
1985-1986	19 490	8 400	43
1991	22 000	12 145	55
1994	23 130	12 350	53
1997	24 370	12 355	51
2000	25 660	13 890	54

Fuente: Mauro Machuca (2002: 23).

CUADRO 3
Evolución del salario mínimo urbano en Perú (1980 = 100)

Año	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
América								
Latina	68	68	68	71	70	70	72	73
Perú	16	12	14	15	15	27	30	29

Fuente: Webb y Fernández Baca (2001: 105-106), con base en datos de la OIT.

Estas conclusiones son apoyadas por los datos del cuadro 2, que indica la evolución y la estabilización de la pobreza en Perú. En la segunda mitad de la década de los ochenta, durante el régimen de García, subió el porcentaje de la pobreza de 45 hasta 55, para estabilizarse en alrededor de 50 en los años de Fujimori, cuando la Constitución de 1993 adquirió un carácter neoliberal y antisindicalista. Los datos del cuadro 3 indican el desarrollo del salario mínimo indexado en comparación con el promedio de América Latina. Hasta los últimos 30 años del siglo pasado, Perú era caracterizado por marcadas diferencias, tanto geográficas como económicas y étnicas. La región costeña, con las grandes urbes, era mestiza, mientras que la región de la sierra, con sus comunidades indígenas, era mayoritariamente quechua-hablante. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de los sesenta, un proceso de migración desde los departamentos serranos hacia los centros urbanos costeños, especialmente Lima Metropolitana, comenzó a adquirir gran impulso. La corriente demográfica serrana era la causa principal de una expansión explosiva de los tugurios y las barriadas dentro y alrededor de la ciudad capital.

La conclusión de este proceso es contradictoria: la sociedad peruana, hasta entonces segmentada fuertemente, se había transformado debido a la migración masiva, la población nacional se había integrado en la pobreza compartida. La mayoría de los pobladores de las barriadas tiene familiares dentro de los departamentos quechua-hablantes. Sus parientes urbanos llegaron a la ciudad, invadieron localidades desiertas alrededor de los cascos urbanos y construyeron sus precarias casas con palos y materiales rústicos.²

² Así describió Arguedas (1971) en su última novela el origen de la ciudad champiñón de Chimbote y el surgimiento, de entre una variedad de migrantes, de un nuevo tipo de ciudadano peruano: el ciudadano chimboteño, tripulante de las bolicheras u obrero en una de las harineras, poblador de una ciudad desesperante, donde no sólo los vivos sino también los muertos del desierto cementerio son anónimos. El "desborde popular" de la migración masiva fue anunciado por Matos Mar (1984) y De Soto (1986) y analizado por Degregori, Blondet y Lynch (1987), por Golte y Adams (1987) y por Adams y Valdivia (1994).

Los migrantes posteriores se acomodaron en los barrios y los domicilios de sus familiares y vecinos ya establecidos, para luego alojarse en sus propias viviendas de autoconstrucción, tratando igualmente de sobrevivir en la informalidad. Este singular proceso de integración mediante la pobreza compartida puede ser ilustrado mediante la comparación de datos intercensales de 1972 y 1993:³

- * La PEA se duplicó entre 1972 (3 786 200) y 1993 (7 121 400).
- * La pauta migratoria parece haber encontrado un punto de equilibrio (10% en 1940, 23% en 1961, 26% en 1972, 22% en 1981 y de nuevo 22% en 1993).
- * La población urbana creció de 59% en 1972 a 70% en 1993. La trayectoria migratoria más importante era sin duda hacia Lima Metropolitana y las ciudades costeñas. Sin embargo, a partir de los años noventa nuevos flujos migratorios se dirigieron hacia ciudades intermedias de la sierra y la costa.
- * El volumen de familias encabezadas por mujeres jefas de hogar en 1993 representó 25% de todas las familias de la nación (de cuatro millones). El 13% de las adolescentes eran madres solteras (1993).
- * El Ministerio de Justicia estima que, en 1999, 17% de los jóvenes peruanos carecía de documentación legal y no estaba registrado en los archivos del sector público o de los departamentos municipales.
- * Alrededor de 1 170 000 peruanos menores de edad sobrevivieron en 1999 en la economía informal. De ellos, unos 150 000 trabajaban en minas, en la recolección de basura, en actividades nocturnas en la calle, etcétera.

Estos fenómenos y sus consecuencias económicas y sociales fueron en su momento apenas calificados de alarmantes. Sin embargo, iniciaron un proceso de descomposición de clase y la reestructuración del orden social en Perú y en toda América Latina. Sectores económicos paralelos, jerarquías sociales paralelas y estructuras institucionales paralelas se originaron en la formalidad y la informalidad, de lo que resultó un orden económico, social, político y cultural mucho más heterogéneo, que gira alrededor de la división entre la riqueza y la pobreza, la integración y la exclusión. Una institucionalidad formal e informal se desarrolló con lógica, moralidad y sanciones propias: el orden reglamentado de la economía y la sociedad informales, a diferencia de la anarquía disfrazada de pobreza, informalidad y exclusión social. En el cuadro 4 se expone el resultado de la coexistencia

³ Véase Ponce (1995: 130-140), actualizado con datos publicados por Social Watch (1999: 33-35).

aparentemente pacífica de la formalidad y la informalidad en Perú y en América Latina. Puede notarse también que Perú se ha visto más afectado por la informalidad que el resto del continente.

CUADRO 4
Estructura del empleo urbano en Perú y en América Latina, 1990-1999
(porcentajes)

<i>Perú</i>	1990	<i>Perú</i>	1999
Sector público	12	Sector público	7
Sector privado	35	Sector privado	39
Autoempleados	33	Autoempleados	30
Empleados en microempresas	15	Empleados en microempresas	18
Servicio doméstico	5	Servicio doméstico	6
<i>América Latina</i>	1990	<i>América Latina</i>	1999
Sector público	16	Sector público	13
Sector privado	41	Sector privado	40
Autoempleados	22	Autoempleados	24
Empleados en microempresas	15	Empleados en microempresas	16
Servicio doméstico	6	Servicio doméstico	7

Fuente: Webb y Fernández Baca (2001: 104), con base en datos de la OIT.

La economía y la sociedad informales generan asimismo brechas demográficas y desintegración de la estructura familiar. América Central, cuyas sociedades han sido golpeadas por la pobreza y por los efectos de la guerra civil, presentan tal vez el ejemplo más tajante de tales rupturas. Mahler (2002) ofrece un panorama de los procesos migratorios tanto internos como externos de los países centroamericanos: el desplazamiento interno obligado por la violencia de la guerra civil y la migración extrarregional, de hecho un éxodo hacia México y los Estados Unidos. Alrededor de 1 130 000 de los 30 millones de centroamericanos viven ahora permanentemente en los Estados Unidos. El 40% de ellos proviene de El Salvador. Otros 700 000 centroamericanos se encuentran en este país como "indocumentados". Mahler analiza una serie de estudios de la CEPAL para subrayar la importancia de las remesas, que mantienen las economías domésticas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Pérez Sáinz (2002) lo complementa con un análisis más preciso de la dependencia familiar de las remesas, dada la reducción estructural del mercado de trabajo centroamericano, las tasas de desempleo de las mujeres y de los jóvenes,

el número de familias desintegradas y la situación de los que se quedaron en el país mientras los familiares masculinos salieron al exterior ante la imposibilidad de obtener un puesto en el mercado laboral doméstico.

Relacionada con la cultura de la pobreza y la orientación política de los informales, existe una profunda desconfianza en las instituciones formales de la democracia, tales como el parlamento, los partidos políticos, el sistema legal y las cortes y los sindicatos obreros. En otras palabras, una de las principales consecuencias sociales y políticas del proceso de pobreza, informalización y exclusión social es la erosión de la legitimidad del orden civil, político y público. Los “antipolíticos” de tendencia neopopulista, que en los años ochenta y noventa llegaron al poder con los votos de las masas excluidas, no podían dejar de escuchar la voz del descontento popular por el funcionamiento de las instituciones de la democracia y tuvieron que dejar éstas de lado y establecer un estilo personalista de gobierno basado en el contacto directo con las masas. En algunos casos, este estilo plebiscitario fue apoyado por una alianza con las instituciones armadas. El estilo de gobierno en la democracia neopopulista cobró rasgos particularistas, personalistas y patrimoniales. La cultura política asociada con este tipo de gobierno está combinando neopopulismo con tecnocracias excluyentes y élites privilegiadas y conservadoras (O'Donnell, 1999: 65).

Todos los sondeos del *Latinobarómetro* en los diferentes países del continente muestran esta desconfianza generalizada respecto de las instituciones propias de la democracia: los partidos políticos, las elecciones, las cortes, el parlamento, el gabinete, el presidente. El reciente estudio sobre *La democracia en América Latina* del PNUD (2004) corrobora esta desconfianza: según las encuestas efectuadas por el mismo *Latinobarómetro* en toda América Latina, más de la mitad de la población (58%) canjearía sin mayor pesar un régimen democrático por un gobierno autoritario, dado que éste acabaría con la pobreza nacional. La desconfianza y tal vez el menosprecio por las instituciones democráticas puede ser explicado en parte por el hecho de que la ley y el orden, y por ende las instituciones asociadas a la legalidad democrática, son ajenos al contexto inmediato de la informalidad. Sobrevivir significa ser extremadamente pragmático frente a actores, instituciones y derechos. La economía informal es un sistema de desprotección: se trabaja sin horario, sin leyes laborales, sin derecho a la jubilación o la seguridad social, sin convenios colectivos y sin sindicatos.⁴ Quien

⁴ Otro ejemplo es el transporte informal. En Lima Metropolitana, conglomerado urbano de ocho millones de habitantes, operaban en agosto de 2002 unos 50 000 buses y 100 000 taxis informales. Para 1993 el gobierno de Fujimori había “liberado” el transporte público con el resultado de que casi no existía un transporte público formal después de una década. La desreglamentación y, en consecuencia, la anarquía autorizada en cuanto a líneas, rutas,

ha aprendido, por necesidad, a operar fuera del contexto legal laboral, quien diariamente debe mostrarse pragmático frente a actores no necesariamente amigables y no necesariamente legítimos, quien debe buscar soluciones “criollas” y moverse por lo menos parcialmente fuera del contexto de convenios y sanciones amparadas por la ley, debe en cierto momento llegar a la conclusión empírica de que la ley, las autoridades y “el sistema” son ajenos, que sirven a los intereses de “los ricos”, que “la política” es sospechosa y que “el derecho” es un bien inalcanzable para los pobres. Quien así piensa y actúa en el ambiente económico cotidiano, estará igualmente inclinado a adoptar una actitud semejante frente a los actores tampoco necesariamente amigables o legítimos en un ambiente donde la violencia también es parte integral de la existencia diaria.

Otro asunto problemático con respecto a la democracia es el de la incapacidad para ejercer el monopolio del uso legítimo de violencia por parte de los gobiernos. Ésta no es consecuencia sólo del legado autoritario y represivo de los regímenes dictatoriales, sino también de la proliferación de la violencia armada por parte de una variedad de actores no estatales (Koonings y Kruijt, 2004b). Esta variedad de actores armados es la contrapartida del proceso mismo de democratización. Contrariamente a la violencia de los años de la dictadura, cuando el Estado mismo era uno de los principales proveedores del terror y la represión, la “nueva violencia” agrupa muy diferentes formas, como, por ejemplo, la violencia criminal de la calle, los motines y disturbios, la “limpieza social” y los ajusticiamientos, la arbitrariedad de la policía, las actividades paramilitares, las actividades guerrilleras de la posguerra fría, etc. Algunos de esos actores poseen un carácter semiinstitucionalizado, como es el caso de los actores armados en Colombia. Otros mantienen un estilo de vida asociado al uso de las armas como si ello fuese parte de una rutina laboral.

VIOLENCIA URBANA

La ciudadanía informal tiene un rostro violento. A finales de los años setenta, Walton (1976, 1977) introdujo el concepto de “ciudades divididas”. Durante los años ochenta las ciudades “divididas” o “fragmentadas” fueron analizadas sobre todo en términos de la miseria o la exclusión urbana, y

seguridad y mantenimiento ocasiona que el público en general se acostumbre a tener un transporte relativamente barato pero sin reglas ni sanciones (entrevistas del autor con Efraín Salas –asesor del viceministro de Transporte a finales de la década de los noventa y asesor del presidente de la Comisión Laboral del Congreso, Luis Negreiros Negrado, en 2002–, los días 10, 15 y 23 de agosto de 2002).

generalmente fueron tipificadas en función de una dicotomía: las élites y la clase media alta frente a los pobladores “olvidados” de las favelas o barriadas.⁵ Sin embargo, a partir de los años noventa, comenzó a identificarse las profundas divisiones urbanas con la falta de seguridad humana y la ausencia de autoridades protectoras en las partes abandonadas del territorio urbano, donde la pobreza suele coincidir con la violencia. El caso de Río de Janeiro, por ejemplo, cuyas favelas paupérrimas semejan áreas de acceso limitado, adquirió una mala reputación en el círculo de analistas de la violencia urbana. La obra de Ventura (2002 [1994]) sobre la *cidade partida* fue seguida por una serie de publicaciones.⁶ La relación entre la pobreza y la violencia en Gran Buenos Aires era discutida, en términos comparativos, por Saín (2002). El debate sobre el panorama actual de la violencia en los territorios metropolitanos de América Latina es descrita en los estudios comparativos de Rotker, Goldman y Balan (2002), Koonings y Kruijt (2004a) y Moser y McIlwaine (2004).

No obstante, la violencia no está arraigada sólo en la vida diaria de los pobres urbanos, es o era también una característica de las prolongadas guerras civiles de los países centroamericanos y andinos. Colombia y Guatemala son, tristemente, dos perfectos ejemplos de cadenas de causalidad entre la violencia generalizada, nacional, y enclaves de paz locales. Sin embargo, la violencia nacional se ha traducido en múltiples formas de violencia local. La Guatemala posbélica es aquejada por nuevas formas de violencia causada por bandas juveniles, ex paramilitares que encontraron empleo en la criminalidad,⁷ y ex militares y ex policías que se refugiaron en la criminalidad y el tráfico de droga (véase Sieder *et al.*, 2002). En Colombia se ha institucionalizado el “desborde de la violencia” durante los últimos 30 años. El conflicto político también ha tenido consecuencias para la violencia relacionada con el tráfico de drogas y la criminalidad local. La guerra civil en este país es reproducida a escala en las microguerras de las áreas metropolitanas y las comunas urbanas. Abajo resumimos el complicado panorama de los actores urbanos extralegales y armados involucrados en las actividades paramilitares y criminales y en la industria de la

⁵ O'Donnell (2003: 14-15) se refiere a esta dicotomía al describir las actuales fronteras internas de América Latina.

⁶ Véase, por ejemplo, Barcellos (2003), Chaves Pandolfi y Grynszpan (2003), Evangelista (2003) y Zaluar (1994, 2001).

⁷ Según los datos proporcionados por el comisionado presidencial para la seguridad nacional, general Otto Pérez Molina, y publicados en *El Periódico* del 15 de mayo de 2004, el número total de paramilitares empleados por el gobierno durante los años ochenta y noventa fue de 1 200 000 (la población total era de 12 millones). De éstos viven actualmente unos 400 000 en los Estados Unidos.

protección en Medellín, segunda ciudad del país y anteriormente la capital de grandes monopolios de la droga, que tras la muerte de Pablo Escobar fueron fragmentados. Mientras tanto, hay actores armados con un pasado militar, criminal, de narcotráfico, de “mara” juvenil o de criminalidad “común” que han construido sistemas de violencia de significación nacional en países como Colombia, Guatemala y México, y, en menor grado, en Argentina, Brasil, Perú y Surinam. En el pequeño Surinam, ex colonia holandesa independizada en 1975 y víctima en los años ochenta de sucesivos gobiernos militares, surgió una economía paralela basada en el comercio de la droga hacia los estados caribeños y Europa, la explotación ilegal de yacimientos de oro y la exportación de madera tropical, que constituía entre 40 y 60% de la economía formal nacional. Esta economía era el motor financiero de la “guerra olvidada”, una guerra civil con rasgos étnicos desarrollada entre 1987 y 1992, cuando el ejército nacional, bandas cimarronas de guerrilla y una variedad de agrupamientos paramilitares se enfrentaron en acciones de insurgencia y contraingurgencia. Los líderes de ambas partes compartían negocios de droga en los periodos de cese al fuego y durante las negociaciones de paz.

Al describir el complicado escenario de la violencia colombiana, Pécaut (1999) introdujo la noción de la “banalidad de la violencia”.⁸ El prolongado conflicto interno transformó el país en una serie de pequeños teatros de una guerra en la que múltiples actores armados trataron de interferir. En el ámbito nacional, puede hacerse una distinción entre las fuerzas estatales de seguridad; las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), como actores armados de la “izquierda”, y las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), como las fuerzas de la derecha, organizadas por iniciativa de las élites rurales y los representantes de la economía clandestina para proteger sus intereses. Detrás de esta configuración nacional hay eslabones entre las fuerzas estatales de seguridad y las “fuerzas oscuras”, las fuerzas del orden y la ley y las fuerzas del desorden, las fuerzas paramilitares y los escuadrones de la muerte, entre la economía oficial y la clandestina. Focalizando los ámbitos locales, aparece una estructura enormemente fragmentada. Escobar (2002) muestra la existencia de alianzas, las que se modifican casi continuamente, entre los socios locales y los actores nacionales. Avilés (2001: 43-47) menciona más de cien asociaciones paramilitares, unificadas durante seminarios y conferencias en los años noventa en instituciones como CONVIVIR, un agrupamiento de movimientos de combatientes y de vigi-

⁸ Otro autor que analizó el conflicto colombiano, en cuanto a sus actores armados, es Leal Bultrago (1999, 2000, 2004).

lantes financiado por empresarios rurales y consistente en comités y serenazgos* locales. Ceballos Melguizo (2001: 115-124) proporciona un análisis impresionante de la fragmentación de la violencia en Medellín durante los años ochenta y noventa. En estos micromundos de la violencia operan consorcios criminales como las *bandas de la pesada*, redes de empresarios clandestinos y del contrabando, y autoridades locales que emplean criminales para el trabajo sucio ocasional, organizados en *oficinas*. Hay también grupos de subalternos alrededor de los líderes de las mafias que actúan como intermediarios en el macabro mercado de los contratos de la muerte y la criminalidad en gran escala, *galladas* (pandillas juveniles) en torno al tráfico de cocaína y *sicarios* (jóvenes que matan por contrato). Las llamadas bandas de *chichipato* emplean armas caseras, roban tiendas, casas-habitación y vehículos, y asaltan a peatones en los barrios de la pobreza; para ello, usan *bazuco*, una base de coca potente, como estimulante. Grupos de *protectores* y de “limpieza social” se dedican a las ejecuciones por contrato, mientras que agrupamientos fragmentarios de paramilitares, milicias y criminales locales encuentran empleo en masacres y otras actividades violentas. Hay también grupos de milicias híbridos, compuestos por individuos de clase baja, procedentes de la guerrilla de izquierda y criminales comunes, organizados en bandas locales. El tráfico de droga acompañó su surgimiento. Entraron en el mercado de la protección, en los años noventa, para actuar contra los escuadrones de la muerte y agrupamientos de “limpieza social” de la derecha. Presentándose como “grupos armados de los barrios”, comenzaron a combatir y a matar a criminales y traficantes de droga y *bazuco*. Los primeros grupos tenían nombres como Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MP/PP), Milicias Populares Valle de Aburrá (MP/VA), Milicias para América Libre, etc. Todos estos grupos establecieron lazos con bandas y líderes locales de izquierda. Fueron producto de la anomia local, originada por el crecimiento explosivo de pandillas criminales y por la crisis y dispersión de la izquierda armada, después de la política del presidente Betancur para la reinmersión en la sociedad (Leal Buitrago, 2004). La consecuencia inmediata fue el fenómeno de “campamentos de paz”, donde jóvenes recibieron formación ideológica y entrenamiento en el uso de armas. Algunos ex militantes de izquierda encontraron empleo en el mercado de la protección y la autodefensa. Otros entraron en las bandas de la droga. La retórica revolucionaria fue reusada para actividades de extorsión disfrazadas de “impuestos populares” y “donaciones revolucionarias”. Otros grupos, como Los Capuchos, comenzaron a actuar como *ronderos*, una reminiscencia de los años de La Violencia

* *Serenazgo*: servicio municipal de vigilancia y seguridad pública en Perú.

(1948-1953), ajusticiando criminales menores, lo que les aportaba apoyo popular y cierta legitimidad. Estos grupos se subdividieron rápidamente y nuevos elementos de carácter eminentemente criminal asumieron el liderazgo. En 1993, el gobernador de Antioquia estimaba que el número de tales milicianos era alrededor de 5 000. En ese mismo año se organizaron “negociaciones de paz” que finalmente fracasaron. Los milicianos formaron luego nuevas bandas, esta vez de menor tamaño, en abierta rivalidad con las bandas netamente criminales y con la policía. El proceso de fragmentación continuó en los siguientes años.

VACÍOS LOCALES DE GOBIERNO⁹

La proliferación de las miniguerras y de actores armados urbanos en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales de gobierno. Estos vacíos se forman a raíz de una prolongada ausencia de las autoridades y representantes de la ley y el orden en áreas específicas (Kruijt y Koonings, 2002: 19). En estos vacíos emerge una simbiosis entre el Estado (la policía y el sistema legal), la criminalidad “común” y elementos criminalizados (anteriores miembros de las fuerzas armadas, la policía, las unidades paramilitares y las guerrillas). Entonces se adapta la ley y la justicia local al orden resultante de las fuerzas paralelas de grupos locales de poder y autoridades “morales” (representantes electos de asociaciones de vecinos, pobladores o moradores, sacerdotes o pastores evangélicos, a veces empresarios exitosos o propietarios de emisora de radio o televisión), en alianzas fluctuantes.¹⁰

Es interesante puntualizar que en este contexto de violencia y de miniguerras por el control de pequeños territorios urbanos, cuyos escenarios tienen un alto grado de volatilidad, las fuerzas armadas no desempeñan un papel preponderante. Durante los largos años de la dictadura militar, gobiernos cívico-militares y guerras civiles, las instituciones armadas fueron los principales actores de la violencia relacionada con el Estado, dirigida hacia los “enemigos internos” de la seguridad nacional: movimientos revolucionarios, guerrillas, frentes de campesinos, líderes sindicales y supuestos comunistas. Un elaborado y a veces complicado sistema de terrorismo de

⁹ Utilizamos aquí las conceptualizaciones anteriores de Kruijt y Koonings (2002), Koonings y Kruijt (2004) y Koonings y Kruijt (2004b).

¹⁰ En un artículo reciente, Davis (2004) reitera la estrecha correlación entre la pobreza, la exclusión social, la informalidad y el surgimiento de nuevos líderes morales de tinte religioso fundamentalista en las lavelas y barriadas de América Latina y los barrios de miseria en África.

Estado, formado por instituciones de inteligencia y seguridad y por unidades paramilitares y policíacas, era el creador de “sociedades del miedo” de alcance nacional, y el ejecutor de la represión “necesaria” en zonas de combate y escenarios de contrainsurgencia, contra las “fuerzas terroristas”. En la década de los noventa, durante el proceso de transición hacia gobiernos civiles, se transformó la ostentosa presencia de los políticos militares en asesores en materia de seguridad e inteligencia militar para los políticos civiles, en la sombra del poder y los “eslabones de consulta”. Incluso al comienzo del siglo XXI, las instituciones de inteligencia y de seguridad en los países andinos y centroamericanos se siguen orientando hacia los enemigos internos del Estado. Sin embargo, en los países del Cono Sur y en México las fuerzas armadas se retiraron de la arena pública para reformular sus objetivos institucionales, siguiendo la dirección de los “militares profesionales”, como en los países miembros de la OTAN. Las instituciones armadas dejaron prudentemente la confrontación pública con actores violentos no estatales a las fuerzas especiales de la policía, entrenadas en el combate de contraagresión urbana. No obstante, mientras las manifestaciones de la “nueva violencia” asumen gradualmente rasgos permanentes, la anomalía de esta situación comienza a revelar el fenómeno del Estado fallido (por lo menos parcialmente) en materia de seguridad y justicia.

Otro rasgo es la proliferación de la vigilancia privada: la policía particular, guardianes nocturnos en los barrios de la clase media e incluso en los distritos populares, serenazgos, escuadrones de protección, inconfundibles fuerzas del sistema bancario y financiero, fuerzas de justicia privada, comandos paramilitares, escuadrones de la muerte. Originalmente asociadas con guerras civiles prolongadas en países como Colombia y Guatemala, estas asociaciones de orden y protección privada se expandieron en toda América Latina y en algunos estados del Caribe como Jamaica. La fragmentación, debida a la “nueva violencia”, de los actores no estatales se nutre en algunos casos de los 400 000 ronderos peruanos y de 1 200 000 patrulleros de autodefensa guatemaltecos¹¹ que actuaron como fuerza paralela en las campañas contra la guerrilla en los años ochenta (Guatemala) y noventa (Perú).

En tercer lugar, podemos mencionar los nuevos actores armados en las faveias, villas, barriadas o comunas de miseria donde la autoridad local de facto es el traficante o el *drug lord*, quien ordena los ajusticiamientos a la vez que es el proveedor financiero de las ONG en su territorio.¹² No se trata de

¹¹ La población total de este país es de 12 millones (2003).

¹² Durante una entrevista (28 de agosto de 2003) del autor con Deusimar da Costa, presidenta de la Federação Municipal das Associações de Faveias do Rio de Janeiro (FEMAFARJ-/FAR-Rio), ella enfatizó que la coexistencia pacífica con los traficantes locales era un asunto

pequeños “territorios olvidados” dentro de las aglomeraciones urbanas, sino de territorios de considerable proporción, que tal vez conforman el 25% del contorno urbano en metrópolis como Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, México, Guadalajara y otras ciudades importantes. Los traficantes, mayoritariamente jóvenes o adultos jóvenes, son los nuevos dueños de la violencia urbana. Ellos actúan en sus barrios también como los nuevos representantes de la ley paralela, no por justicia sino ajusticiando. A veces cobran “impuestos paralelos” y muestran una cierta benevolencia hacia el “desarrollo local” también paralelo, ofreciendo financiar las ONG locales en las faveias y villas marginalizadas. En otros casos negocian explícitamente con los líderes religiosos locales, quienes han aprendido a convivir en coexistencia pragmática.¹³ Los traficantes en las villas argentinas, las faveias brasileñas, los tugurios colombianos y las zonas guatemaltecas han reproducido escenarios de guerra o guerrilla nacional en los territorios urbanos. En algunos casos han expresado sus aspiraciones territoriales en público. Recientemente los principales traficantes de Río de Janeiro anunciaron –y efectuaron– el cierre de la autopista al aeropuerto internacional, demostrando así que podían ejercer sanciones en caso de necesidad.

Algunos miles de niños y adolescentes funcionan como “soldados de la droga” en las guerras urbanas en Río de Janeiro. Zaluar (2000) tipificó la relación entre bandas juveniles y el comercio de las drogas en las faveias de Río de Janeiro con razón como una “integración perversa” de la economía clandestina y la violencia urbana. En este contexto también hay que analizar el nuevo papel de las bandas juveniles criminales (“maras”) en Centroamérica. En El Salvador, Honduras, Guatemala y en menor grado en Nicaragua las maras son oficialmente consideradas como la amenaza número uno para la seguridad nacional (Savenije y Andrade-Eekhoff, 2003; Savenije, 2004).¹⁴ Decenas de miles de jóvenes de entre 12 y 30 años

común y corriente. “Ellos también son *moradores*”, dijo la señora, “y su presencia no nos molesta. Ellos tienen el poder de intervenir y, a pesar de todo, son *moradores*. Puede decirse que mantenemos una vida simbiótica. No estamos inclinados a llamar la policía a cada momento.”

¹³ En entrevistas (los días 29 y 30 de agosto de 2003) del autor con Jonas Pedreira, presidente de la asociación de moradores en una de las favelas del Cono Norte de Río de Janeiro, éste dejó en claro que el traficante local había ofrecido en repetidas ocasiones financiar las obras sociales de la iglesia y de las ONG afiliadas a la asociación, “sin ningún compromiso”, pero que tanto él como el pastor evangélico comprendieron que el arreglo implicaría el reclutamiento de jóvenes para tareas de protección y transporte de contrabando, y rechazaron sus ofrecimientos. El mismo fenómeno se presenta en Gran Buenos Aires (entrevista con Marcelo Saín, vice-ministro de Seguridad en la provincia de Gran Buenos Aires, 26 de junio de 2003).

¹⁴ Actualmente, en el centro de San Salvador el fenómeno de las maras está expandiéndose al sistema escolar profesional. Mareros estudiantiles se repartieron territorios de influencia en el centro de la ciudad (entrevista con Wim Savenije, 12 de mayo de 2004).

de edad pertenecen a una de las maras o pandillas juveniles, las que tienen una macabra presencia nacional por ser responsables de 20% (Guatemala) y 45% (El Salvador y Honduras) de los homicidios cometidos en 2003 (Peetz, 2004).¹⁵ La economía marera centroamericana depende del control territorial y el acceso al tráfico y comercio local de las drogas. La escala de operación en términos de la violencia percibida es tan grande que los parlamentos salvadoreño y hondureño aprobaron una legislación especial antimarera que permite comandos especiales compuestos por miembros de las fuerzas policiales y militares (“Operación Libertad” en Honduras, “Plan Mano Dura” en El Salvador, ambos en 2003).¹⁶ En El Salvador el número de víctimas mortales de la violencia marera ya ha superado el número total de muertos durante la guerra civil.

Todo eso lleva a preguntarse sobre la estabilidad de un orden político que implica la existencia generalizada de una ciudadanía de segunda clase. La pobreza dentro de un contexto de violencia parece ser el mecanismo estandar de integración de los marginalizados urbanos. Segmentos considerables de la población de América Latina sobreviven en la economía y la sociedad informales, donde se comparte la pobreza y la violencia diariamente. Muchos de los actores armados de esta “nueva violencia” son reclutados en las filas de los informales y los excluidos. Este fenómeno de la exclusión con violencia compartida por las masas de los pobres urbanos contribuye a la destrucción del orden democrático y los perímetros de la ciudadanía. La violencia crónica, incluso dentro de los límites de enclaves territoriales, contribuye a la erosión de la legitimidad del orden político. Resulta paradójico que varios gobiernos latinoamericanos, así como líderes populares y autoridades religiosas, en su contexto local, hayan aceptado una coexistencia pacífica con los actores no estatales de la violencia, mientras que éstos no constituyan públicamente una amenaza para las autoridades políticas nacionales. La pregunta clave es, por supuesto, cuánto tiempo más podrá ser garantizada la estabilidad del orden económico, social y político en América Latina, en este precario equilibrio entre niveles “aceptables” de exclusión y niveles “aceptables” de violencia.

¹⁵ Las estimaciones acerca del número de mareros por país difieren de manera considerable. Peetz (2004: 59) cita distintas fuentes que mencionan entre 14 000 y 200 000 en Guatemala, 10 500 y 35 000 en El Salvador, y 36 000 y 100 000 en Honduras. Tal vez Nicaragua cuenta con 4 500 mareros, Costa Rica con 2 600, Panamá con 1 385 y Belice con 100.

¹⁶ A la fecha (julio de 2004) el gobierno de Guatemala está preparando un paquete legislativo similar.

BIBLIOGRAFÍA

- Adams, Norma y Néstor Valdivia (1994), *Los otros empresarios. Ética de migrantes y formación de empresas en Lima*, Lima, IEP (2ª edición).
- Alba Vega, C. y D. Kruijt (1995), *La utilidad de lo minúsculo. Estudios sobre la informalidad y la microempresa en México, Centroamérica y los países andinos*, México, El Colegio de México ("Jornadas", núm. 125).
- Arguedas, José María (2001), *El zorro de arriba y el zorro de abajo*, Lima, Editorial Horizonte (5ª edición) (primera edición: Buenos Aires, Editorial Losada, 1971).
- Avilés, W. (2001), "Institutions, Military Policy, and Human Rights in Colombia", *Latin American Perspectives*, vol. 28, núm. 1, enero, pp. 31-55.
- Barcellos, Caco (2003), *Abusado. O dono do morro Santa Marta*, Río de Janeiro, Editora Record.
- Bastos, Santiago (1998), "Los indios, la nación y el nacionalismo", en Claudia Dary (ed.), *La construcción de la nación y la representación ciudadana en México, Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia*, Guatemala, Flacso, pp. 87-157.
- Ceballos Melguizo, Ramiro (2001), "The Evolution of the Armed Conflict in Medellín. An Analysis of the Major Actors", *Latin American Perspectives*, vol. 28, núm. 1, enero, pp. 110-131.
- Chaves Pandolfi, Dulce y Mario Grynspan (2003), *A favela fata. Depoimentos ao CP-DOC*, Río de Janeiro, Editora Fundação Getúlio Vargas.
- Chinchilla, Laura (2003), "Citizen Security in Latin America", en Moufida Goucha y Francisco Rojas Aravena (eds.), *Human Security. Conflict Prevention and Peace in Latin America and the Caribbean*, Santiago de Chile, Unesco/Flacso Chile, pp. 237-249.
- Cotler, Julio (ed.) (1995), *Perú 1964-1994. Economía, sociedad y política*, Lima, IEP ("Perú Problema", núm. 24).
- Davis, Mike (2004), "Planet of Slums", *New Left Review*, núm. 26, marzo-abril.
- Degregori, Carlos Iván, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch (1987), *Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos en San Martín de Porres*, Lima, IEP.
- Escobar, C. (2002), "Clientelism and Citizenship: The Limits of Democratic Reform in Sucre, Colombia", *Latin American Perspectives*, vol. 29, núm. 5, septiembre, pp. 20-47.
- Evangelista, Helio de Araujo (2003), *Violência, jogo de bicho e narcotráfico segundo uma interpretação*, Río de Janeiro, Editora Revan.
- Flores Galindo, Alberto (1994), *Buscando un inca: identidad y utopía en los Andes*, Lima, Editorial Horizonte (4ª edición).
- Galli, Rossana y David Kucera (2003), *Informal Employment in Latin America: Movements over Business Cycles and the Effects of Worker Rights*, Ginebra, ILO/International Institute for Labour Studies (DP/145/2003).
- Golte, Jürgen y Norma Adams (1987), *Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima*, Lima, IEP.
- Koonings, Kees y Dirk Kruijt (eds.) (2004a), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Londres, Zed Books (por publicarse).

- Koonings, Kees y Dirk Kruijt (2004b), "Armed Actors, Organised Violence and State Failure in Latin America: A Survey of Issues and Arguments", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Londres, Zed Books (por publicarse).
- Kruijt, Dirk (1997), "Pobreza, informalidad y exclusión social en América Latina", en Rafael Menjivar, Dirk Kruijt y Lieteke van Vucht Tijssen (eds.), *Pobreza, exclusión y política social*, San José, Unesco/Flacso, pp. 198-220.
- Kruijt, Dirk y Kees Koonings (2002), "Introducción: la violencia y el miedo en América Latina", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Las sociedades de miedo. El legado de la guerra civil, la violencia y el terror en América Latina*, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca ("Acta Salamanticensia/Biblioteca del Pensamiento y Sociedad", núm. 84), pp. 21-49.
- Kruijt, Dirk y Kees Koonings (2004), "The Military and their Shadowy Brothers in Arms", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Londres, Zed Books (por publicarse).
- Kruijt, Dirk, Carlos Sojo y Rebeca Grynspan (2002), *Informal Citizens. Poverty, Informality and Social Exclusion in Latin America*, Amsterdam, Rozenberg Publishers ("Thela Latin America Series").
- Leal Buitrago, Francisco (ed.) (1999), *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*, Bogotá, Tercer Mundo Editores.
- Leal Buitrago, Francisco (2000), "Situación política de Colombia", *Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe*, núm. 3, pp. 55-64.
- Leal Buitrago, Francisco (2004), "Armed Actors in the Colombian Conflict", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Armed Actors: Organised Violence and State Failure in Latin America*, Londres, Zed Books (por publicarse).
- López, Silesio (1996), "Perú: mapas de una ciudadanía inconclusa", *Sociedad Anómica*, diciembre, pp. 3-23.
- Maler, Sarah J. (2002), "Las migraciones y la problemática transnacional: tendencias recientes y perspectivas para 2020", en Klaus Bodemer y Eduardo Gamarra (eds.), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, pp. 160-196.
- Matos Mar, José (1984), *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú de la década de 1980*, Lima, IEP ("Perú Problema", núm. 21).
- Mauro Machuca, Raúl (2002), *Cambio en la pobreza en el Perú: 1991-1998. Un análisis a partir de los componentes del ingreso*, Lima, CIES/DESCO ("Investigaciones Breves"), abril.
- Mintrabajo (2002), *Perú: situación del empleo*, Lima, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo/Dirección Nacional de Promoción del Empleo-Programa de Estadísticas y Estudios Laborales, agosto.
- Moser, Caroline y Cathy McIlwaine (2004), *Encounters with Violence in Latin America. Urban Poor Conceptions from Colombia and Guatemala*, Londres, Routledge.
- O'Donnell, Guillermo (1999), *Counterpoints: Selected Essays on Authoritarianism and Democratization*, Notre Dame, University of Notre Dame Press.

- O'Donnell, Guillermo (2003), "Acerca de las problemáticas fronteras en América Latina", en Guillermo O'Donnell *et al.*, *Cruzando fronteras en América Latina. Keynote Lectures Presented During the Third European Congress of Latinoamericanists (CEISAL 2002, Amsterdam)*, Amsterdam, CEDLA ("Cuadernos del CEDLA", núm. 13), pp. 1-18.
- Pécaut, Daniel (1999), "From the Banality of Violence to Real Terror: The Case of Colombia", en Kees Koonings y Dirk Kruijt (eds.), *Societies of Fear. The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*, Londres, Zed Books, pp. 141-167.
- Peetz, Meter (2004), "Zentralamerikas Jugendbanden. 'Maras' in Honduras, El Salvador und Guatemala", *Brennpunkt Lateinamerika. Politik-Wirtschaft-Gesellschaft*, núm. 5, pp. 49-63.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo (2002), "Las cuentas pendientes de la modernización. Tendencias laborales y sus efectos sobre la integración social en el istmo centroamericano", en Klaus Bodemer y Eduardo Gamarra (eds.), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, pp. 187-212.
- PNUD (2004), *La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay*. www.democracia.UNDP.org, abril.
- Ponce, Ana (1995), "Perú: perfil sociodemográfico (1972-1993)", en Gonzalo Portocarrero y Marcel Valcárcel (eds.), *El Perú frente al siglo XXI*, Lima, PUCP /Fondo Editorial, pp. 127-155.
- Portes, Alejandro y Kelly Hoffman (2003), "Latin American Class Structures: Their Composition and Change During the Neoliberal Era", *Latin American Research Review*, vol. 38, núm. 1, pp. 41-82.
- Rotker, Suzana, en colaboración con Katherine Goldman y Jorge Balán (eds.) (2002), *Citizens of Fear. Urban Violence in Latin America*, New Brunswick, Rutgers University Press.
- Saín, Marcelo Fabián (2002), *Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Savenije, Wim y Katharine Andrade-Eekhoff (2003), *Conviviendo en la orilla. Violencia y exclusión social en el área metropolitana de San Salvador*, San Salvador, Flacso.
- Savenije, Wim (2004), "Las maras y la seguridad nacional en Centroamérica", *Foreign Affairs en Español*, núm. 2, abril-junio, pp. 48-57.
- Sieder, Raquel, Megan Thomas, George Vickers y Jack Spence (2002), *Who Governs? Guatemala Five Years after the Peace Accords*, Cambridge, Mass., Hemispheric Initiatives y Washington Office on Latin America (WOLA).
- Social Watch (1999), "La democracia sigue en suspenso, la pobreza se mantiene", en Alberto Adrianzen *et al.*, *El Perú realmente existente. Análisis y datos estadísticos sobre mujeres, niños, indígenas, descentralización, pobreza, mortalidad, desigualdad, derechos laborales*, Lima, CEDEP /Diakonia, pp. 31-42.
- Solares, Jorje (1992), "Guatemala: etnicidad y democracia en tierra arrasada", en Gabriel Aguilera *et al.*, *Los problemas de la democracia*, Guatemala, Flacso, pp. 47-72.

- Soto, Hernando de (1986), *El otro sendero*, Lima, El Barranco.
- Ventura, Zuemir (2002), *Cidade partida*, Río de Janeiro, Editora Companhia das Letras (primera edición en 1994).
- Walton, John (1976), "Guadalajara: Creating the Divided City", en Wayne Cornelius y R. U. Kemper (eds.), *Metropolitan Problems and Governmental Responses in Latin America*, Beverly Hills, Sage.
- Walton, John (1977), *Elites and Economic Development. Comparative Studies in the Political Economy of Latin American Cities*, Austin, The University of Texas Press.
- Webb, Richard y Graciela Fernández Baca (2001), *Anuario Estadístico. Perú en números 2001*, Lima, Instituto Cuánto.
- Zaluar, Alba (1994), *Condomínio do Diabo*, Río de Janeiro, Editora da UFRJ.
- Zaluar, Alba (2000), "Perverse Integration: Drug Trafficking and Youth in the Favelas of Rio de Janeiro", *Journal of International Affairs*, vol. 53, núm. 2, pp. 654-671.
- Zaluar, Alba (2001), "Violence in Rio de Janeiro: Styles of Leisure, Drug Use, and Trafficking", *International Social Science Journal*, núm. 3, pp. 369-379.